

la costa. Hágase saber; publíquese y elévense estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision. Lo proveyó y firmó el ciudadano juez segundo de Distrito Lic. José Maria Canalizo. Doy fé.—*José Maria Canalizo.*—*Manuel M. Chavero*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo cinco de mil ochocientos setenta y dos.

Visto el juicio de amparo que en 23 de Enero próximo pasado promovió ante el juzgado segundo de Distrito de esta capital el ciudadano Agustin Moreno, considerando violada en su persona la garantía individual que otorga el artículo 59 de la constitucion federal con la determinacion del ciudadano gobernador del Distrito que lo consignó al servicio de las armas en las costas. Vistos el informe del gefe del resguardo diurno que fue quien aprehendió al quejoso; el remitido por el ciudadano gobernador que hizo la consignacion reclamada; el documento justificativo que acompaña esta autoridad; lo pedido por el promotor fiscal y la sentencia del juez segundo de Distrito antes citado, en la cual, teniendo en consideracion que la garantía que invoca el ciudadano Moreno está suspensa por la ley de primero de Diciembre último y que segun esta, su consignacion al servicio militar es un hecho debidamente autorizado, declara que no procede el recurso pretendido. Con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869 se resuelve lo siguiente; «Por sus propios legales fundamentos, es de confirmarse y se confirma la sentencia referida del juez segundo de Distrito fecha 24 de Febrero del presente año declarándose que la justicia de la Union no ampara ni protege al ciudadano Agustin Moreno contra la resolucion del ciudadano gobernador del

Distrito á virtud de la cual fué consignado al servicio de las armas.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Anza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Febrero veintiuno de mil ochocientos setenta y dos.—*Lic. Agustin Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

De garantías promovido por el C. Manuel María de Navarrete, en representacion de su esposa D^a Carmen Udaeta ante el juzgado de Distrito de Querétaro, contra un acuerdo del ayuntamiento de esa ciudad, por el que se privó á las casas números 7 y 8 de la calle del Placer de Capuchinas del agua limpia que disfrutaban.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que el C. Manuel Navarrete en legítima representacion de su esposa D^a Carmen Udaeta ha solicitado con el amparo correspondiente, la suspension del acuerdo del ayuntamiento de esta ciudad, en cuya virtud se mandó cerrar la toma de veintisiete pajas de agua

que tenían las casas núm. 7 y 8 de la calle del Placer de Capuchinas.

De la lectura de los documentos que obran á fojas 1 y 2 de este expediente, se deduce:

Primero; que el ayuntamiento reconoce el pleno derecho á las referidas pajas de agua en la señora Udaeta.

Segundo; que deja á salvo sus derechos para que reclame los remanentes, subremanentes de las personas que actualmente poseen estas aguas por enagenacion que aquella ha hecho de las mismas.

Tercero; que no se defiende á la solicitud del Sr. Navarrete presentada en 19 de Marzo del año próximo pasado.

Para formarse una idea exacta y cabal de este asunto, es indispensable tener á la vista aquella solicitud; supuesto que entre el informe del ayuntamiento y escrito del quejoso existe una palpable contradiccion.

En el primero se asienta, que por los datos que obran en la secretaría, aparece que el Sr. Navarrete ha vendido veintiocho pajas de las aguas en cuestion á distintas personas, que serán entonces las mismas contra quienes se han dejado al actor derechos á salvo para reclamar los remanentes y subremanentes respectivos. En el segundo se afirma, que el ayuntamiento ha privado á la señora Udaeta de estos derrames correspondientes á las veintisiete pajas de agua repetidas de lo que sin dificultad se infiere, que hay una cuestion pendiente entre el municipio y la señora Udaeta sobre esas aguas, y que el primero, en uso de sus facultades administrativas, ha privado á la segunda de cierta cantidad de esas aguas; reconociendo los derechos de la misma á los remanentes subremanentes de las tomas que parece que en su totalidad ha enagenado.

En tal estado de cosas, hay que proceder con esa mesura que si es propia del poder judicial, se hace indispensable en el de la federacion. Cuando se examina circunstanciamamente su organizacion, y se

comprende los complexos de sus atribuciones: se vé cuan difícil es su ejercicio por lastimar no solo intereses de los particulares sino de personas revestidas de autoridad, corporaciones y aun de Estados, cuyos avances necesitan á veces contenerse. Si está encargado del deber de hacer respetar los derechos inatos del hombre contra las violencias de la sociedad ó de sus agentes; para llenarlo cumplidamente, hay que persuadirse de la realidad de su violacion para no estorbar sin objeto la marcha expedita del poder administrativo. Así es que, antes de suspender un acto reclamado, debe considerarse si admite reparacion una vez ejecutado; si los perjuicios que se siguen al quejoso son de mayor ó menor trascendencia comparados con los del público; y por último, evitar colisiones entre las diversas autoridades cuando un motivo grave no las autorice.

Por lo expuesto, el promotor fiscal, somete á la aprobacion del juzgado las siguientes proposiciones:

Primera; no es de suspenderse el acto reclamado.

Segunda; que se le diga al ayuntamiento, que para examinar con mejores datos la queja del C. Navarrete, remita copia de todo el expediente que se haya formado para privarle del uso de las aguas referidas, en el informe justificado que debe rendir conforme á la ley.

Querétaro, Enero diez y seis de mil ochocientos setenta y dos.—*Luis Castañeda.*

Segundo pedimento del ciudadano promotor fiscal sobre el mismo negocio.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el ayuntamiento de esta ciudad en sesion celebrada el dia 28 de Diciembre último, acordó:

Primero; No acceder á la solicitud del C. Manuel M. Navarrete, fechada en 19 de Marzo del año próximo pasado:

Segundo; dejar á salvo los derechos de la señora D^a Carmen Udaeta para reclamar los remanentes y subremanentes de veintisiete pajas de agua que tenían las casas núm. 7 y 8 de la calle del Placer de Capuchinas.

Tercero; cerrar las tomas de agua, que aun disfrutaban esas casas, á pesar de haber sido enagenadas (p. 1.) Este acuerdo es posterior al de 18 de Febrero en que se declaró: que la señora D^a María del Carmen Udaeta, esposa del C. Manuel Navarrete, está en su derecho para hacer uso de los remanentes que le corresponden á la merced de agua con que el marqués de la Villa del Villar del Aguila dotó las casas referidas. El ocurso de 17 de Marzo obra en copia certificada á fojas 82, y allí formula el interesado su cuenta del modo siguiente:

"Las casas núm. 7 y 8 del Placer, pertenecientes á mi esposa la señora D ^a Carmen Udaeta, fueron dotadas por el marqués del Villar del Aguila, su primer dueño, con veintisiete pajas de agua limpia, habiéndola introducido él á la ciudad...	27
Por subremanentes.....	6½
Tienen por los primeros remanentes..	13
Tienen por toda merced.....	47½
Se han enagenado.....	23
Quedan.....	24½

Segun los datos que se registran en la secretaría del ayuntamiento, son veintiocho y no veinticuatro las pajas de agua enagenadas por la señora Udaeta (p. 33 y 34.)

El quejoso añade, que el ayuntamiento ha resuelto privar á las casas referidas de los remanentes subremanentes que corresponden á veintisiete pajas de agua que los fueron concedidas por el marqués del Villar del Aguila, que conservó el carácter de juez privativo del ramo, por haber gastado de su peculio en la construccion del acueducto la cantidad de cien mil pesos (p. 2.)

Como se ve por el primer acuerdo municipal, se compensaron los remanentes y subremanentes reclamados con diez y nueve un cuarto mas que de hecho tenía la señora Udaeta.

Por el segundo acuerdo se declaró, que habiendo dispuesto ésta de las veintisiete pajas de la concesion primitiva, carecía de título legal para continuar disputando las que conservara; dejándole á salvo sus derechos contra los poseedores de los remanentes y subremanentes en cuestion. Este acto anula los derechos adquiridos por la señora Udaeta en virtud del acuerdo de 18 de Febrero de 1871; pero su reparacion si es justa, corresponde á los tribunales del Estado que deben conocer de las cuestiones contencioso-administrativas.

Mas si se quiere interpretar ese acuerdo como simple abuso ó exceso de poder con el que se ha causado daño á la señora Udaeta; por el cual el acto administrativo haya perdido su carácter, toca á los tribunales ordinarios restituir al despojado de esos derechos y resolver sobre la indemnizacion que merezca el daño inferido.

La única garantía que podria considerarse vulnerada es la propiedad real; pero hay que tener presente que se trata en el caso solamente de derechos adquiridos en virtud de un acto de administracion.

Si se hubiera privado á la señora Udaeta de las veintisiete pajas que vendió y eran de su esclusivo dominio, no hay duda que semejante acto importaria un ataque directo á su propiedad; pero tratándose de la agua que obtuvo por interpretacion que dió el ayuntamiento á la concesion primitiva, hay que examinar la utilidad del acto reclamado, la validez de esa interpretacion extensiva, sus fundamentos ó arbitrariedades, y la naturaleza de los derechos de que se privó á la actual propietaria: asuntos muy ajenos de la jurisdiccion de vel. Por lo expuesto, el promotor fiscal, somete al recto ó ilustrado parecer del juzgado las siguientes proposiciones:

Primera; no es de accederse al amparo solicitado:

Segunda; de conformidad con lo prevenido en el art. 10 de la ley de 20 de Enero de 1859, se recibe este negocio á prueba por el término de ocho días.

Querétaro, Enero veinticinco de mil ochocientos setenta y dos.—*Luis Castañeda.*

Tercer pedimento del ciudadano promotor fiscal.

C. juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que el C. Manuel M. de Navarrete en representación de su esposa D^{ña} Carmen Udaeta, reclamó al ayuntamiento de esta ciudad, diez y nueve pajas de agua como remanentes y subremanentes de veintisiete que aquella había enagenado y correspondían á las casas de su propiedad núm. 7 y 8 de la calle del Placer de Capuchinas. En 18 de Febrero del año próximo pasado se accedió á su solicitud en términos ambigüos y generales, declarando, que la Sra. Udaeta estaba en su derecho para hacer uso de los remanentes anexos á la merced con que el marques del Villar del Aguila dotó las casas referidas. Como el modo de hacer uso de sus remanentes, consistía en tomar diez y nueve pajas de la caja repartidora, parece que el ayuntamiento se conformó con la intención del reclamante, que no satisfecho con aquella resolución presentó nuevo recurso en 17 de Marzo, que fué proveído en 28 de Diciembre, mandando cerrar la toma de las diez y nueve pajas de agua que tenían las casas mencionadas. Se interpretó el acuerdo de 18 de Febrero dejando á salvo los derechos de la Sra. Udaeta contra las personas á quienes vendió la primitiva merced, y que realmente disfrutaban de los remanentes reclamados.

Para que en el caso hubiese ataque á la propiedad, era preciso que las diez y nueve pajas en cuestión fueran del número de

las veintisiete que reza la antigua concesión. La paja de agua es una medida de figura cuadrada en la que cada lado tiene aproximativamente seis milímetros y exactamente cincuenta y ocho diez milímetros: veintisiete de esas aberturas practicadas en la caja repartidora se reservó el marques del Villar del Aguila; de las mismas era propietaria la Sra. Udaeta; las enagenó traspasando voluntariamente su dominio: ¿cuál es el derecho de propiedad que tiene á diez y nueve mas de cuyo uso se le ha privado? Los remanentes y subremanentes son los derrames de las fuentes en donde se reciben esas aguas: la interesada está en la aptitud de recogerlos, si se los ha reservado, de las personas que los poseen en una con las mercedes que les ha vendido: ¿es justo que el ayuntamiento le compense esas aguas sobrantes, concediéndole nuevas datas? Así parece que lo resolvió este cuerpo en 18 de Febrero de 1871: por lo que los derechos adquiridos por la expresada señora no tienen otra base que ese acuerdo, ni su queja otro fundamento que la anulación de este por el posterior de 28 de Diciembre del mismo año. Al dictar esta última providencia, el ayuntamiento ha obrado dentro del círculo de sus facultades, conforme á sus atribuciones, y con el verdadero carácter de autoridad administrativa conociendo y decidiendo sobre un negocio de interés comun. Según la opinión de los publicistas, pocos asuntos hay mas eminentemente administrativos que los de aguas. Mientras que en los demas se empieza por reconocer una propiedad que sirve de fundamento á la competencia de las acciones, los de aguas son de una índole especial que los constituye en una categoría diferente; por lo mismo que es tan diversa la naturaleza legal de esta sustancia. El vecindario de esta ciudad como dueño de las aguas que sirven para su surtimiento, conforme á las Reales cédulas de 18 de Noviembre de 1803 y de 22 de Junio de 1807, y representado por el ayuntamiento, concede su

uso por miras de utilidad pública y por reglas que se apartan de la marcha común de otros negocios. Por lo mismo, el cuerpo municipal no ha podido menos que ejercer sus funciones y de aplicar su acción en esta materia sin detenerse por los obstáculos que ya un interés bastardo, ya una opinión equivocada pretenda oponer á su desarrollo.

Al obrar así lo hace con el carácter de la administración activa, que ni puede ser estorbada ni impedida en el ejercicio de su acción, ni juzgada por los tribunales ordinarios, ni detenida en las gestiones que son de su resorte y constituyen el fundamento de su competencia.

En el sentir de Cormenin, Macarel, de Gerardo Froncart Chaveau Adolphe y La Ferrier, la administración activa obrará en el círculo de sus facultades:

Primero; cuando movida por consideraciones de interés público, determine la aplicación más beneficiosa de las aguas, y cuanto conduzca al fin principal que debe proponerse que es el de su mejor y más amplio aprovechamiento.

Segundo; cuando otorgue las concesiones á que le autorice la ley, y que sean conformes á dicho fin, según las reglas que se hubieren prescrito, ó que la razón, el buen sentido y una mira indudable de conveniencia pública aconsejare.

Tercero; cuando establezca reglamentos para regularizar el uso y aprovechamiento las aguas, de manera que se conserve el orden entre los partícipes ó usuarios, conciliando el doble interés de estos con el del público.

Cuarto; cuando resuelva los casos y cuestiones de ejecución á que el ejercicio de estas atribuciones pueda dar lugar.

Quinto; cuando sometiendo á las disposiciones de las leyes y al orden en las mismas señalado, haga la declaración de utilidad pública, en las obras que hayan de emprenderse, y promueva el establecimiento de la servidumbre legal de acueducto

que tenga por objeto facilitar y realizar el mejor y más amplio aprovechamiento de las aguas.

De entera conformidad con estas teorías, hallamos establecidas en la práctica, en las ordenanzas municipales para el régimen interior de los ayuntamientos del Estado y promulgadas en 23 de Junio de 1841, las reglas siguientes.

“Son atribuciones de la comisión de aseo y limpieza de las calles, barrios y aguas limpias y sucias: 1.^a cuidar que las fuentes públicas se hallen bien abastecidas y que cada individuo que goza merced no tome más cantidad que aquella que se le concedió al tiempo de comprarla (art. 112). Las providencias de las comisiones que quedan expresadas, excepto la de fiestas, serán puramente gubernativas y económicas, y cuando fuere necesario proceder judicialmente contra alguna persona, la comisión excitará el celo de alguno de los alcaldes constitucionales para que proceda á tomar las disposiciones á que hubiere lugar con arreglo á las leyes y bandos de policía (art. 121).”

“Lo dispuesto en el art. anterior, no se entenderá respecto á la comisión de aguas limpias y sucias, pues ésta podrá disponer en estos ramos todo lo que creyere conveniente al sostenimiento del reparto de las aguas sucias y renta de las limpias, siempre de acuerdo con el ayuntamiento (art. 122).”

Por lo expuesto se ve, que el ayuntamiento de esta ciudad, ha obrado con el verdadero carácter de autoridad administrativa al conocer y decidir sobre este negocio que es de interés público. Su acción, debió y debe ser por lo mismo libre, expedita y exclusiva cuando ha resuelto un caso, en el que, el interés colectivo del municipio se encontraba en frente del de un individuo. “Es la distinción fundamental del interés particular y del interés colectivo la que traza profundamente la línea de demarcación entre el derecho de los tribunales y el derecho de la administración. Mientras los inte-

reses de que se trata sean generales ó colectivos, su conocimiento y decision corresponden á la administracion activa. (La Ferriere. Curso de derecho público y administrativo)

La division de los poderes administrativo y judicial es un principio constitucional de un orden tan elevado como la inviolabilidad de los derechos del hombre. La autoridad administrativa y la autoridad judicial, tienen una esfera de accion del todo diferente. Dentro de ella debe girar cada una, y el día en que cada uno de los poderes la traspasara introduciéndose en la del otro el orden social seria amenazado de un trastorno. Esta division de ambas autoridades es un principio conquistado por las luces del siglo, á costa de la experiencia de los anteriores y consignado expresamente en el art. 50 de la Constitucion.

Una vez reconocido el principio es lógico admitir sus consecuencias. Una vez determinada la competencia judicial ó administrativa por las leyes, por la naturaleza de las materias, es necesario no confundir las dos esferas de accion, cuyos límites están de antemano marcados, si no se quiere introducir un elemento desorganizado en el cuerpo social. No todo interes herido por un acto puramente administrativo importa un ataque á las garantías individuales. Su efecto es hacerlo contencioso y produce el derecho en el ofendido, de llevar su queja á los tribunales competentes.

En virtud de las anteriores consideraciones, el promotor fiscal pide, se sirva v. d. declarar: que la justicia de la Union no ampara ni protege á la Sra. D^a Cármen Udaeta de Navarrete, contra el acuerdo del patriótico ayuntamiento de esta ciudad, por el cual mandó cerrar la toma de agua de las casas números 7 y 8 de la calle del Placer de Capuchinas; con motivo de haberla enagenado la precitada Sra. en distintas fracciones á diversas personas que continúan en el goce legal de esa merced.

Querétaro, Febrero de mil ochocientos setenta y dos.—*Luis Castañeda.*

Sentencia del O. juez de Distrito.

Querétaro, Febrero veintitres de mil ochocientos setenta y dos.

Visto el escrito de amparo promovido por el C. Manuel Martinez de Navarrete en representacion de su esposa D^a M^a del Carmen Udaeta de Navarrete, contra un acuerdo del ayuntamiento de esta capital fecha 29 de Diciembre del año próximo pasado, por el que se le privó del agua limpia que disfrutaban las casas números 7 y 8, de la calle del placer de Capuchinas de la propia ciudad: visto el informe con justificacion rendido por dicha corporacion; el pedimento del O. promotor fiscal de fojas 44 á la 46 vuelta; las pruebas rendidas por una y otra parte; los alegatos de las mismas; la citacion para sentencia con todo lo demas que se tuvo presente y ver convino.

Considerando: que el ayuntamiento al acordar como lo hizo en 29 de Diciembre citado, no invadió las atribuciones del poder judicial ni tampoco determinó en negocio fuera de su competencia, supuesto que obró conforme á las facultades que le conceden las ordenanzas municipales de la ciudad y á virtud de la solicitud que hiciera el C. Navarrete ante la propia corporacion, con cuyo hecho reconoció este como legítima aquella autoridad:

Considerando; que habiendo enagenado la Sra. Udaeta todas las veintitres pájas de agua limpia que disfrutaban las casas núm. 7 y 8 de la calle del Placer, propiedad de dicha señora, sin reservarse una sola de aquellas, quizo la misma privar á dichas fincas de la merced de que disfrutaban, sin que haya razon para que el ayuntamiento estuviera obligado á permitirle que disponga de mas cantidad de agua.

Considerando: que si bien es cierto que la referida corporacion en su acuerdo de

23 de Diciembre, mandó tapar la toma del agua que corría para dichas casas, no por esto privo al Sr. Navarrete del derecho que pudiera tener su citada esposa á los remanentes ó subremanentes de las pájas vendidas, sino solo impidió que aquellos los tomara del acueducto comun de la ciudad, habiéndole dejado su derecho á salvo para que lo exigiera de los respectivos compradores, caso de haberse reservado semejante derecho, en cuya circunstancia no cometió ninguna violencia ni ataque á los derechos del quejoso.

Considerando por último: que si bien es cierto que el ayuntamiento como representante de la poblacion reconoce una deuda de gratitud al ilustre benefactor que introdujo el agua potable á esta ciudad y en cuyos derechos sucedió la Sra. Navarrete como poseedora de las fincas propias de aquel, esto no dá ningun derecho para que la corporacion esté en el deber de reponer el agua que aquella enagenó. Por todas estas razones y por los fundamentos alegados por el C. promotor fiscal, el C. juez con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, dijo que debía de declarar y declaró: que el presente negocio no está comprendido en los casos en que tiene lugar el amparo, y en consecuencia que la justicia federal no ampara al C. Navarrete en representacion de su esposa contra el acuerdo del ayuntamiento de esta ciudad fecha 29 de Diciembre del año próximo pasado.

Ilágase saber á las partes y elévense estos autos á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion para los efectos que determina la ley.

Así definitivamente juzgando lo decretó y firmó el C. juez 2º suplente de Distrito Lic Juan Mº Vega, Doy fé.—*Juan M. Vega.*—Ante mí.—*Francisco Ruiz.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo ocho de mil ochocientos setenta y dos.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Querétaro por el C. Manuel Navarrete en representacion de su esposa la señora Dª Carmen Udaeta contra el ayuntamiento de la misma ciudad, que en 28 de Diciembre último dispuso se tapase la toma de agua de que disfrutaban las casas números 7 y 8 de la calle del Placer de Capuchinas, cuya disposicion viola, segun el quejoso, las garantías consignadas en los artículos 13, 14, 16 y 21 de la constitucion federal;

Considerando: que en el presente caso no hay violacion de las garantías á que el quejoso se refiere y que el ayuntamiento de la ciudad de Querétaro procedió dentro de la órbita de sus facultades, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada el 23 de Febrero próximo pasado por el juzgado de Distrito de Querétaro, que declara: que la justicia federal no ampara al C. Navarrete en representacion de su esposa, contra el acuerdo del ayuntamiento de esa ciudad, fecha 29 de Diciembre próximo pasado.

Devuélvase sus actuaciones al juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafuiga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Anza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Marzo

nuevo de mil ochocientos setenta y dos.
Lic. Agustín Peraltá, oficial mayor.

COMPETENCIA

Suscitada por el C. juez de letras de lo criminal de Querétaro al 6º de lo civil de México, para conocer de la demanda entablada ante este por el C. Juan Baggali, contra la señora Dª Rómula Paniagua y su esposo D. Ramon Viveros, sobre pago de trece mil cincuenta y cuatro pesos y sus réditos.

PRELIMINARIO DEL C. FISCAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

El fiscal dice: que ha examinado los autos que se tienen á la vista relativos á la competencia suscitada por el juez de letras de la ciudad de Querétaro, al 6º de lo civil de esta capital para conocer de la demanda ejecutiva que D. Juan Baggali tiene promovida á Dª Rómula Paniagua por sí y por D. Ramon Viveros Garrico, como marido de la señora Paniagua, sobre pago de trece mil cuarenta y cinco pesos (\$ 13045) y sus correspondientes réditos, á razon del seis por ciento anual.

El motivo que ha dado origen á esta competencia es el siguiente: Enplazada la señora Paniagua y su marido por el juez 6º de lo civil de México, y citada por los periódicos cuyas hojas se fijaron en los autos; exhortado el juez de Querétaro para que citara á los demandados, sucedió casualmente que la señora Paniagua, despues de ese emplazamiento y ese exhorto, falleció ella intestada en la ciudad de Querétaro. El juez de esta ciudad, procedió entonces á practicar las diligencias necesarias para asegurar los bienes y proceder al juicio de inventarios. Pues bien, esta circunstancia cree que le dá suficiente jurisdiccion para atraer á sí el conocimiento del litigio que D. Juan

Baggali sigue contra la intestada y su marido.

La razon en que el juez de Querétaro funda su jurisdiccion, es la de que el juicio de intestado es universal y atractivo; pero ese principio no es exacto; porque era necesario suponer antes, que el juicio de inventarios tuviera tal carácter en las demandas por deudas; lo que no es cierto: porque ni hay ley alguna que declare ser entonces atractivo el dicho juicio, ni la jurisdiccion tampoco lo atribuye esa calidad. Así, pues, queda destruido por su base, el principio en que el juez de Querétaro se funda para reclamar el conocimiento de este negocio.

Por el contrario, basta leer con atencion las razones alegadas por el juez 6º de lo civil de esta capital, para quedar desde luego convencido de su competencia para conocer del asunto á que estos autos se refieren.

Con efecto, el referido juez 6º es competente, en primer lugar; porque, segun la ley 45 tit. 2º part. 3ª, la demanda debe entablarse en el lugar en que prometió pagar ó hacer alguna cosa; y habiendo la señora Paniagua prometido solemnemente, en virtud de una escritura pública otorgada en esta capital; es claro que si hoy viviera, tendria que cumplir con esta estipulacion confirmada y ratificada en la parte final de esa misma escritura, en donde terminantemente los contrayentes se sujetaron al fuero y jurisdiccion de los jueces de esta capital.

En segundo lugar, es competente el juez de México; porque toda vez que segun el tenor de la escritura citada se sujetó á los jueces de México la demandada, renunció cualquier otro fuero: y esa renuncia fué válida, porque segun la conocida ley 1ª tit. 1º libro 10 de la Novísima Recopilacion, de cualquiera manera que aparezca que uno quiso obligarse, de esa manera queda obligado.

En tercer lugar lo es tambien, porque